

# Cambios en la geopolítica y sus efectos en la educación superior

MARTÍN UNZUÉ

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

Vivimos en un mundo convulsionado, incierto, en el que se vislumbran transformaciones profundas. Más allá de los debates sobre el reordenamiento global, que advierten diversos modos sobre la configuración de un nuevo orden, existe una certeza: estos cambios impactan e impactarán en las universidades y probablemente modificarán de manera profunda sus condiciones de funcionamiento, sus formas de legitimidad y sus horizontes de desarrollo.

Estamos ante una gran paradoja. Los *rankings* globales de universidades –que surgieron tardíamente durante el ciclo neoliberal como la pieza maestra del proyecto de construcción de un mercado mundial de educación superior<sup>1</sup>– buscaron establecer un modelo de universidad global, aunque en la práctica resultara inalcanzable para gran parte de los países, y pese a las críticas ampliamente justificadas que han recibido. Sin embargo, hoy el proyecto de las *world class universities* parece estar anunciando su crisis en el hemisferio norte, donde tuvo su principal origen y consolidación.

Mi hipótesis es que estamos presenciando una transformación desafiante, de gran profundidad histórica. Los *rankings* encumbraron un modelo de universidad: la universidad de investigación intensiva, altamente demandante de recursos financieros y construida sobre el molde de las principales universidades norteamericanas, mismas que hoy están en el centro de fuertes ataques que atentan contra la libertad académica, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y de expresión, e incluso la investigación.

Hasta hace muy poco habría sido inimaginable que el gobierno de Estados Unidos de América (EUA) atente de modo tan contundente contra esas instituciones de gran prestigio, productoras de saberes de punta, que han sido responsables de buena parte del reconocimiento y la influencia mundial de ese país. El fuerte avance que ocurre actualmente contra muchas de esas universidades –el ejemplo de Harvard es el más resonante– no considera que estas instituciones son condensaciones virtuosas e irrepetibles, sostenidas por décadas o siglos de esfuerzos

colectivos enormes, transmitidos de generación en generación.

En marzo de 2025, el Departamento de Educación de EUA inició investigaciones con fines de sanción a 52 universidades, entre otros motivos, por “discriminación racial”, lo que originó numerosas sanciones y amenazas, en general con repercusiones presupuestarias. Como consecuencia, estas medidas derivaron en la suspensión de programas e investigaciones, la desvinculación de profesores, la expulsión de estudiantes y la revocación de visas tanto de estudiantes como de profesores extranjeros. Esto afectó la internacionalización de dichas instituciones, la cual ha sido una de sus características principales. El resultado fue que muchas universidades tuvieron que desplazar a sus rectores, y claudicar ante las amenazas y los impactos de los recortes y las presiones.

¿Por qué sucedió esto? Los factores que nos han traído hasta este punto son múltiples y complejos. Mencionaré unos pocos sin orden de prioridad.

Estamos en una nueva etapa del capitalismo, en la que las grandes corporaciones tecnológicas ocupan la vanguardia de las transformaciones mundiales; quieren tener el control directo y total de la producción del conocimiento relevante y estratégico. Hoy les parece insatisfactoria la mediación de las universidades, incluso de las universidades mercantilizadas, de las empresas-universidades articuladas con las demandas de los mercados, como lo son las instituciones norteamericanas, que hasta hace poco eran una referencia ineludible de la producción de conocimiento.

El desprecio a las universidades no obedece a la convicción de que el conocimiento haya perdido relevancia. Por el contrario, el conocimiento es todavía

un recurso decisivo para el ejercicio del poder político y militar, como vemos en las guerras actuales. A pesar de la proliferación de discursos anticientíficos y de formas de negacionismo de los últimos años –como el terraplanismo–, la ciencia y el conocimiento son más importantes que nunca en un contexto atravesado por profundas transformaciones tecnológicas, geopolíticas y económicas. Tales discursos anticientíficos prosperan porque contribuyen a legitimar los ataques contra instituciones que determinados actores perciben como un obstáculo. No debe confundirse, por tanto, la difusión de narrativas anticientíficas con una pérdida de valor de la ciencia o del conocimiento.

Las conclusiones del famoso informe de Vannevar Bush de 1945 sobre la relevancia estratégica de la ciencia siguen tan vigentes como hace 80 años. Lo que está en discusión no es la importancia del conocimiento,



sino quién lo produce, quién lo financia y quién decide sobre sus usos. Por eso, ese falso discurso que parece querer desprestigiar a la ciencia ayuda a legitimar el avance contra la universidad como institución central en la producción mundial de conocimiento. Este proceso favorece la transferencia de la investigación y, en especial, de los fondos que la financian hacia las empresas privadas que continúan dependiendo de una importante inversión pública, de manera que estas reciben los beneficios económicos y la relevancia estratégica del control de esos conocimientos. En ello reside una de las principales novedades y una de las rupturas más significativas respecto del ciclo neoliberal hoy en crisis.

El neoliberalismo puso a las universidades a investigar para el mercado. Ahora, la tendencia parece orientarse a desplazar directamente a las universidades de la producción de determinados cono-

cimientos. El objetivo ya no sería únicamente orientar la investigación, sino controlar plenamente saberes considerados estratégicos para moldear un futuro que, como ocurre en los períodos de crisis, se presenta más abierto e incierto que en otras etapas históricas.

Hoy las grandes agencias norteamericanas –como la NASA– pagan las investigaciones realizadas predominantemente por las empresas privadas, que producen saberes muy sensibles y que solo controlan ellas. Lo vemos en los debates recientes sobre la inteligencia artificial y la empresa Anthropic. ¿Quién es el dueño real de ese conocimiento que puede tener tantas implicaciones políticas y sociales?

Esta disputa por el control del conocimiento entra necesariamente en tensión con concepciones que, aunque hoy ocupan un lugar marginal en muchas universidades centrales, siguen orientando buena parte del trabajo de las universidades latinoamericanas, especialmente de las públicas. Se trata de la idea del conocimiento como un bien público, abierto y de acceso universal.<sup>2</sup>

Entonces, todo ese movimiento impugnatorio de las universidades tiene ese sentido: dada la dificultad de sustraerlas plenamente de esa dimensión del deber ser, de ese compromiso ético con el bienestar del mundo, hay que excluirlas de la mesa de producción del nuevo conocimiento que definirá el mundo por venir. Por eso, el ataque se dirige contra la universidad y la ciencia en general, pero adquiere una intensidad particular en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Aunque estas disciplinas difícilmente generen patentes o desarrollos comercializables, hoy se encuentran en el ojo de la tormenta.



Las nuevas derechas globales –que producen y difunden masivamente sus propios discursos políticos a través de *think tanks* y universidades altamente financiadas– denuncian el supuesto “adoctrinamiento” de estas áreas del conocimiento. Ese argumento tiene efectos concretos: recortes presupuestarios, cierre de programas y reducción de espacios académicos. En distintos países se observan procesos similares de retracción de las ciencias sociales y las humanidades, impulsados por presiones políticas y culturales cada vez más intensas.

Podríamos hablar del adoctrinamiento de los discursos sobre el adoctrinamiento. Estos tienen un extraordinario potencial disciplinador, pues dificultan que la política pueda abordarse como el análisis necesario de nuestra realidad social. Esto incluye tanto los problemas ambientales, históricos y vinculados a las diversidades, como el objetivo de la formación de ciudadanos capaces de vivir en sociedades democráticas.

En muchos países las universidades cierran, reducen o limitan sus áreas de ciencias sociales y humanidades<sup>3</sup> para evitar denuncias y conflictos con esas fuerzas impugnadoras que, como una nueva inquisición, despliegan mecanismos de vigilancia sobre los campos de conocimiento social. Este fenómeno también se observa en otros niveles educativos.

La referencia a “la batalla cultural” –retomada como bandera por las derechas extremas que disputan el orden y la geopolítica mundial– constituye una ofensiva contra el pensamiento crítico –no hay ciencia sin ese extrañamiento, sin esa pregunta disruptiva–, contra la potencia de la producción de saberes des-

mercantilizados, y claro, contra la potencia de los saberes que imaginen un futuro distinto, que puedan aportar análisis y datos críticos sobre el presente, y que puedan proponer cambios a futuro. Por eso, las fuerzas ultra conservadoras son las que casualmente dirigen a las empresas tecnológicas que están en esa vanguardia del cambio capitalista, las que nos quieren retrotraer al pasado, las que denuncian a los gritos un infundado retorno “al comunismo” en las universidades, a veces *aggiornado* como *wokismo*, y que, en nombre de ello, impulsan la impugnación de estos saberes, promueven su erradicación completa y buscan universidades reducidas a la mínima función de la enseñanza, de una enseñanza profesionalizante, aparentemente despolitizada y que no dispute la producción de saberes estratégicos, sean tecnológicos o sociales.





Hoy, cuando la democracia mundial está bajo presión, cuando el orden internacional es incierto, cuando los peligros de la sustentabilidad medioambiental pueden estar cruzando límites que comprometan nuestra supervivencia, cuando el futuro del trabajo como principal ordenador de la vida social parece incierto, las universidades deben redoblar sus esfuerzos por estar en el centro de la producción de todos esos conocimientos que el mundo requiere para dirimir su futuro.

La discusión que estamos presenciando gira precisamente en torno a esa cuestión: quiénes deben ser los actores responsables de producir esos conocimientos que ordenen, que sean la carta de navegación en las aguas turbulentas que se avecinan. El ataque a las universidades busca desplazarlas de ese lugar, reemplazarlas por otros actores que funcionan

con lógicas incompatibles con el sostenimiento del horizonte del bien común.

Esto es un enorme desafío para las comunidades y las gestiones universitarias del mundo. Es necesario recuperar los debates de fondo, desplazar el foco de los innumerables problemas coyunturales que dificultan la mirada de mediano y largo plazo, e impulsar una discusión profunda sobre los desafíos y las misiones de la universidad en un contexto de transformaciones aceleradas.

En los inicios de la década de 1930, en un contexto marcado por una profunda crisis, Ortega y Gasset asumió el desafío de pensar la misión de la universidad. Hoy, casi un siglo después, es necesario volver a reflexionar sobre las misiones –en plural– de la universidad, en escala global, y nosotros particularmente de la universidad latinoamericana y caribeña, que debe

tener las fuerzas y la creatividad para analizar el presente y proponer una hoja de ruta, prospectivamente, desde nuestra singularidad en este nuevo orden internacional en ciernes.

Las tensiones de un mundo que parece cruzar nos obligan a repensar no solo qué conocimientos debemos producir, sino también qué graduados debemos formar y para qué sociedades, que no pueden dejar de ser democráticas, solidarias, respetuosas de los derechos humanos, del medioambiente y de nuestra casa común, pero también sociedades comprometidas con las diversidades, con la pluralidad que fortalece y enriquece; sociedades dispuestas a sostener la cooperación y a profundizar su compromiso con la justicia social y el desarrollo de nuestros pueblos.

La UDUALC convoca a este encuentro con la convicción de asumir ese desafío y de traducirlo en acciones concretas en cada universidad, en cada unidad académica, en cada aula, entre docentes, investigadores e institutos. Ese es, en definitiva, el gran desafío.

## Notas

1. El primero fue el Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como el *ranking* de Shanghai que se publica desde 2003.
2. Notemos, de paso, que la muy bien intencionada Ley 26.899 de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, que fue sancionada en Argentina en 2013, así como en otros países de Latinoamérica, como Perú, resulta adecuada a esta transferencia de un sistema que produce conocimiento aplicable no aplicado. En el Artículo 5, establece la obligatoriedad de publicar los datos de investigación primarios de toda investigación hecha con fondos públicos en un plazo no mayor a cinco años desde el momento de su recolección para que puedan ser utilizados por más investigadores. La mesa está servida para que, si llega a haber algo valioso, las corporaciones lo tomen y lo privaticen patentándolo.
3. En varios países, como Argentina en el clima del gobierno de Milei, son numerosas las universidades, incluso públicas, que promueven reformas de los planes de estudio de diversas carreras. Si bien suelen declarar que los fines son reducir la duración “excesiva” de las carreras y “modernizarlas”, en los hechos sacrifican en este altar de la “despolitización” a los contenidos sociales.

